

Hong Kong: ¿un país, mil problemas?

Xulio Ríos

Hong Kong forma parte de la “historia negra” de China. Todo el periodo que va de 1840 hasta el llamado Movimiento del 4 de Mayo de 1919, incluyendo la fundación de la República de China y la caída de la dinastía Qing (1644-1911), constituye la época de la “Revolución de la Vieja Democracia”. Las guerras del Opio representan uno de los elementos centrales de dicho período y de él arranca el status de Hong Kong.

Desde comienzos del siglo XVII, cuando fundaron la East Indian Company, los colonialistas británicos venían manteniendo una pesada pugna con los holandeses por el control de la hegemonía marítima. Para alcanzarla se sirvieron de todos los medios y estratagemas a su alcance. Al igual que Rusia, Portugal, Japón o España, se valían del comercio, los cañones o la religión, indistintamente, para abrir puertas en una China aun hermética al mundo exterior pero que albergaba importantes riquezas que todos codiciaban. Las relaciones conflictivas de China con los británicos comenzaron en 1637 al rechazar la invasión de **John Weddell** sobre Guangzhou. En esta ciudad establecerían sus primeras oficinas comerciales, con permiso de la corte Qing, en 1699. Su comercio se basaba fundamentalmente en tejidos de lana y especias (más tarde algodón) a cambio de té, porcelana y plantas medicinales.

En la primera mitad del siglo XIX, el comercio entre ambos países resultaba extremadamente deficitario para Gran Bretaña. Para corregir la balanza comercial, Londres apoyó las exportaciones de opio que pasaron de 2.000 cajas en 1800 a 39.000 en 1837. Desde 1773, los británicos controlaban en su totalidad el contrabando de opio en el Imperio del Centro. Aunque en 1729 fue prohibido oficialmente, progresó de forma imparable, sobre todo tras la total ocupación de India y la consolidación de la Compañía de las Indias Orientales. La venta de opio llegó a convertirse en la principal fuente de ingresos del Imperio Británico y un factor decisivo para asegurar el equilibrio de sus relaciones comerciales con China.

El tráfico de esta droga minaba la salud de millones de chinos y desangraba la capacidad económica del país. Pero cuando las autoridades chinas iniciaban acciones de represión del contrabando, el gobierno británico se comprometía un poco más en la concesión de amparo y protección a los narcotraficantes. En abril de 1840, el Parlamento inglés declaró la guerra a China y dos meses más tarde 4.000 soldados desembarcaban en la provincia de Guangdong. El 29 de agosto de 1842 se firmaba el Tratado de Nanjing por el que China cedía Hong Kong a Inglaterra, obligándose además

a abrir Guangzhou, Xiamen, Ningbo y Shanghai al comercio exterior, a consentir el establecimiento de consulados de Inglaterra en China, a fijar una tarifa arancelaria especial para las mercancías inglesas y, finalmente, a indemnizar con una suma de 21 millones de liang de plata (unidad tradicional china que equivale a unos 40 gramos). El Tratado de Nanjing se convirtió en el primer “Tratado desigual” y sus condiciones se extenderían posteriormente a terceros países (Estados Unidos, Francia, etc.).

La victoria británica no solamente sirvió para mantener el boyante comercio del opio, sino sobre todo para favorecer la penetración comercial e industrial de las potencias occidentales, arruinando gran parte de la frágil base económica local. Esto provocó numerosos levantamientos campesinos y populares. El más importante fue el movimiento del Reino Celestial Taiping, dirigido por **Hong Xiuquan** (1814-64). Esta revolución campesina logró establecer un poder revolucionario durante 14 años y está considerada como la más importante en la historia de China. La situación de guerra civil (algunas fuentes cifran el número de muertos en veinte o treinta millones de personas) y los múltiples desórdenes internos fueron aprovechados por Inglaterra para ampliar sus privilegios, provocando una segunda guerra del opio (1856-58) y la firma de un nuevo tratado con nuevas y mayores concesiones. Las hostilidades continuaron hasta que en 1860 se firmó el Tratado de Pekín por el que, entre otros, se otorgaba a Londres la península de Kowloon (Jiulong, en chino), próxima a Hong Kong. China, además, perdía el control de sus aduanas, que pasaba a manos de los extranjeros. En 1911 le embargarían directamente los ingresos obtenidos por este concepto para saldar las indemnizaciones que China debía pagar por los daños causados durante la rebelión de los Boxers (un movimiento xenófobo –los Yihequan- que practicaba el boxeo chino como sistema de entrenamiento moral y físico).

Los privilegios adquiridos en China por los comerciantes británicos y occidentales contribuyeron a debilitar aún más su economía, pero no saciaban los apetitos imperialistas de las grandes potencias, en plena expansión. Una mínima excusa (un barco puesto en cuarentena o el asesinato de un intérprete) servían de fundamento para arrancar más y más concesiones estrechando el cerco. En 1898, China se ve obligada a arrendar a Gran Bretaña los Nuevos Territorios (Xinjie, en chino), un área contigua a Kowloon junto con 235 islas e islotes. A finales del siglo XIX, China deja de ser dueña de su propio destino y contempla impotente cómo se expolían sus riquezas y se le impone una elevadísima carga en forma de indemnización de guerra. El país se sumerge en una etapa de vertiginosa descomposición política, económica y social que conocerá breves momentos de esperanza (la emergencia del movimiento republicano de **Sun Yat-sen**) y otros de profunda desesperación (periodo de los señores de la guerra).

La situación de decadencia y crisis interna que se respiraba a comienzos del siglo XIX, espléndidamente descrita por **Jacques Gernet**, culmina finalmente en una profunda catarsis impulsada en buena medida, aunque no solo, por las agresivas incursiones de las potencias occidentales.

El interés británico por el territorio de Hong Kong obedecía fundamentalmente a motivos de carácter comercial y estratégico. El puerto, uno de los mejores del mundo por su gran calado, ofrecía unas condiciones naturales excelentes para servir de escala en la ruta hacia el Extremo Oriente y Australia.

Así, dos de los tres territorios objeto de devolución el 1 de julio de 1997 estuvieron en manos de Gran Bretaña durante más de un siglo, con la sola excepción del período de ocupación nipona (1941-45). Conocer y comprender el contexto histórico de los tratados desiguales es fundamental para aproximarse a la rigidez de la posición china. La dominación británica es una muestra especialmente significativa de una humillación degradante, profundamente interiorizada en el imaginario chino y de la que difícilmente podían derivarse concesiones graciosas.

Para China, recuperar la soberanía sobre Hong Kong significaba poner punto final a una humillación histórica que amargó a generaciones enteras de chinos. No solo aumentaba su riqueza y prosperidad de forma sustancial sino que le permitía medirse de igual a igual con las potencias occidentales.

¿Por qué el 1 de julio de 1997? El 92% de la superficie de la colonia estaba representado por los llamados Nuevos Territorios. Esta zona había sido objeto de arrendamiento a la Corona Británica en 1898 mediante un acuerdo diplomático válido por 99 años. El plazo expiraba el 30 de junio de 1997. El 8% restante, cedido a perpetuidad en virtud de los denominados Tratados desiguales impuestos a China como consecuencia de las guerras del Opio también sería devuelto.

1.1.Las negociaciones sino-británicas a propósito de la retrocesión

La diplomacia china siempre confió en recuperar pacíficamente estos territorios y nunca admitió que el restablecimiento de su soberanía resultara del ejercicio de la violencia o consecuencia de la intromisión internacional. Ni siquiera en los momentos más críticos del pasado siglo (durante la segunda guerra mundial, al proclamarse la China Popular o durante la Revolución Cultural) auspició movimiento alguno para una toma anticipada de la colonia. Los incidentes más graves se registraron durante la Revolución Cultural (1966-76). En 1967 se produjeron 51 muertos y 800 heridos, y solo la intervención del primer ministro **Zhou Enlai** consiguió frenar la escalada de tensión y poner fin al bloqueo de Hong Kong. Entonces, poco faltó para que prosperara la propuesta de la Banda de los Cuatro, liderada por la mujer de Mao, **Qian Qing**, de enviar el Ejército Rojo a Hong Kong.

Tampoco China, oficialmente, puso especial empeño en aprovechar los conflictos internos de Hong Kong para beneficiarse: durante las protestas de 1966 contra la delincuencia y el aumento de los precios o a finales de la década de los setenta cuando los estudiantes del enclave se movilizaron para exigir que el chino se reconociera como idioma oficial, cosa que no lograrían hasta 1974. Por el contrario, las autoridades chinas siempre manifestaron cierto deseo de colaboración con Hong Kong. En los años cincuenta, es China quien propone la reapertura de la línea de ferrocarril existente entre

Guangzhou y Kowloon y quien muestra más interés en fomentar el intercambio comercial. En 1960 propuso la venta de agua, un bien problemático en el enclave. En 1964, la excolonia se había convertido en el primer importador de productos continentales, por delante incluso de la Unión Soviética.

En lo que se refiere al ámbito internacional, en 1972, al poco de regresar a la ONU, China rechazó la inclusión de estos territorios (Hong Kong, y también Macao) en la lista del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, partiendo de la consideración de que se trataba de partes de su superficie que fueron ocupadas pero no colonizadas. El 8 de marzo de 1972 el representante permanente de China ante la ONU reiteraba que los dos territorios eran parte inalienable de China. El Comité de Descolonización aprobaba el 15 de junio de 1972 una propuesta concreta para eliminar estas referencias de la lista de territorios colonizados. La resolución fue aprobada en noviembre del mismo año. Así, en términos de legalidad internacional, China se evitó una posterior discusión acerca de la procedencia o no de una consulta popular sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación. Gran Bretaña tampoco insistió en este asunto. Nadie en la colonia se planteó la reivindicación de la independencia. Todos eran conscientes de que no existía base legal para ello, ni tampoco histórica, para una reivindicación de dicha naturaleza.

La primera etapa y la más decisiva de las negociaciones entre las autoridades británicas y chinas comenzó en septiembre de 1982 y culminó en el mismo mes dos años después. Inicialmente, las autoridades británicas pretendían intercambiar reconocimiento de soberanía por continuación del control del poder administrativo en Hong Kong. La parte británica insistió igualmente en la validez de los Tratados Desiguales (no reconocidos por China), a la luz de la legalidad internacional. Pero poco a poco, como sería la tónica dominante de todo el proceso negociador en el futuro, cedería una tras otra en sus posiciones ante la contundencia de la razón china.

Podríamos distinguir dos fases en esta etapa inicial. La primera, que va desde septiembre de 1982 a junio de 1983, sirvió para definir los principios y los procedimientos de negociación. La segunda, de junio de 1983 a septiembre de 1984, se ocupó de concretar los detalles y de culminar la redacción del documento básico. La “Declaración Conjunta sobre la cuestión de Hong Kong” fue firmada en Beijing el 19 de diciembre de 1984 por **Margaret Thatcher** y **Zhao Ziyang**, entonces secretario general del PCCh, en presencia de **Deng Xiaoping**. El 27 de mayo del año siguiente los gobiernos chino y británico intercambiaron los respectivos instrumentos de ratificación. El registro del acuerdo en la sede de la ONU oficializó plenamente a nivel internacional un documento hasta entonces inédito en su contenido, por los sujetos intervinientes y por la naturaleza misma de las previsiones que establece. El 30 de junio de 1997, Gran Bretaña debía cesar en la administración del territorio y, al día siguiente, pasaría a ser ejercida por China.

Básicamente, en este documento, China asumía los siguientes compromisos:

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Constitución de la República Popular China (aprobada en 1982), Hong Kong se convertiría el 1 de

julio de 1997 en una Región Administrativa Especial (RAEHK) y dispondría de una Ley Básica que sería aprobada por la Asamblea Popular Nacional de China. La Ley Básica debería garantizar un marco autonómico amplio para la gestión de los problemas e intereses de Hong Kong, muy semejante en su contenido al vigente con las autoridades británicas. Esta Ley Básica fue aprobada en 1990.

2. Durante 50 años debía respetarse el estilo de vida y los sistemas legal, judicial, financiero, etc., vigentes en el enclave. Es decir, mantendría su propia moneda, la libre circulación de capitales, su condición de puerto franco, se respetará la propiedad privada, el derecho hereditario, la presencia empresarial... No habría nacionalizaciones. Además, podría continuar con su participación en las organizaciones internacionales de ámbito económico o comercial de las que formaba parte. Posteriormente, las autoridades chinas señalaron que el límite de 50 años representaba un mínimo y no un máximo temporal.
3. Los habitantes de Hong Kong podrían elegir a sus representantes, si bien no llega a precisarse el modo en que dicha elección se llevaría a cabo. Tanto el poder ejecutivo como el legislativo estarían integrados por personas residentes en el enclave. China se comprometía a no enviar cuadros políticos para hacerse cargo de la administración.
4. Debían respetarse los derechos y libertades básicas de expresión, prensa, reunión, asociación, la continuidad del sistema educativo, el respeto de las creencias religiosas y la libre circulación de los residentes, tanto en el interior como hacia el exterior.
5. También debían respetarse los derechos de los empleados públicos, garantizándoseles la continuidad en sus puestos y todos los derechos económicos, activos y pasivos, que pudieran corresponderles.

La administración china se reservaba el control de la defensa y de las relaciones exteriores, al igual que la propia Gran Bretaña había venido haciendo en los últimos cien años.

La parte china basó la recuperación de su soberanía en dos principios esenciales. De una parte, en la fórmula propuesta por Deng Xiaoping, “Un país, dos sistemas”, que resume los puntos esenciales del acuerdo. China seguiría siendo China y Hong Kong seguiría siendo Hong Kong: cada uno con su sistema propio dentro del mismo país. Los dos sistemas coexistirían. En la declaración se expresa con toda claridad el compromiso de China de no aplicar el sistema y las políticas calificables de “socialistas” en la RAEHK. De otra, Hong Kong debía ser gobernada por los propios hongkoneses, es decir, asegurando la preservación de una autonomía real que se consideraba la mejor de las garantías para mantener la estabilidad y el futuro singular de este territorio.

La Declaración Conjunta incorporó además otros tres documentos:

- La explicación específica del gobierno de la República Popular China sobre sus políticas básicas con respecto a Hong Kong (en este anexo se garantizan los derechos y las libertades civiles de que disfrutaban los hongkoneses; la tenencia

de un carnet de identidad propio que los diferenciaría de los demás ciudadanos del país, y la concesión de pasaportes especiales para los habitantes con siete años o más de residencia continuada en la colonia).

- Sobre el Grupo de Enlace conjunto sino-británico, órgano previsto para desarrollar y continuar las negociaciones.
- Sobre los contratos de arrendamiento de terrenos. El suelo era ya uno de los bienes más preciados del enclave y la parte china deseaba establecer previsiones concretas para evitar que a través de eufemismos legales no pudiera llegar a disponer efectivamente del territorio que pasaría a controlar.

La firma de la Declaración Conjunta constituyó todo un acontecimiento, pero despertó sentimientos contradictorios: satisfacción en unos, temor y preocupación en otros. En realidad, la trayectoria de China desde comienzos de los años ochenta del siglo pasado había disipado algunas dudas, especialmente en lo económico. China ya no temía al mercado. El suyo era un socialismo en permanente cambio. La convivencia de “oasis” realmente capitalistas (las llamadas Zonas Económicas Especiales) en una China formalmente socialista se venía experimentando en las zonas costeras del país desde comienzos de dicha década sin desatar especiales tensiones. Por el contrario, eran el espejo en el que muchos territorios chinos querían reflejarse.

La actitud de la elite económica de Hong Kong fue, en su inmensa mayoría, la de aproximarse a las autoridades chinas buscando el entendimiento sobre la base de asegurar un cambio de poder estable sin afectar la prosperidad del enclave. Y China estaba de acuerdo con este planteamiento. La vigencia del capitalismo no correría peligro alguno en Hong Kong.

Sin embargo, la firma del documento sino-británico obligó a desmenuzar los pormenores de esta transición y no siempre brilló la unidad de criterio. Las rondas negociadoras se multiplicaron para intentar resolver las diferencias, pero cuando se aproximaban posiciones en un aspecto se distanciaban en otro. Casi inmediatamente después de la firma de la Declaración Conjunta, Gran Bretaña comenzó a expresar su preocupación por introducir reformas políticas en la vida de la colonia y las negociaciones fueron suspendidas en varias ocasiones.

Un punto de inflexión clave en las relaciones sino-británicas a propósito de Hong Kong se produjo en torno al movimiento socio-político de protesta registrado en Beijing en 1989. Los sucesos en la plaza de Tiananmen en mayo-junio de 1989 provocaron en Hong Kong, en primer lugar, un gran movimiento de solidaridad, política y económica con los estudiantes, incluso entre segmentos importantes del movimiento pro-Beijing (el presidente de la Federación de Sindicatos, por ejemplo, apoyó activamente las manifestaciones). Un millón de personas llegaron a manifestarse en apoyo de las reivindicaciones estudiantiles y en contra de la represión; se recaudó mucho dinero y se prestó una importante ayuda a las personas que huyeron entonces de China. En segundo lugar, una reacción de indignación y fundado temor ante las expectativas respecto del futuro de sus modestas libertades. Tomó cuerpo entonces una actitud más crítica de los

habitantes de Hong Kong hacia Beijing. Varios miembros hongkoneses que participaban en la comisión redactora de la Ley Básica presentaron su dimisión irrevocable. No pocos optaron por emigrar a Canadá o Australia, en especial el personal cualificado. Mientras, en la elite funcionarial y económica se iban perfilando dos posiciones: la de los partidarios de privilegiar el entendimiento con Beijing para asegurar una transición estable y otra que entendía ese futuro como resultado de la insistencia en la democratización de la vida política, en la configuración previa de una identidad propia y diferenciada.

Para Beijing, Hong Kong se convirtió de repente en una base de apoyo a la subversión interna y eso comenzó a reflejarse en el propio contenido de la Ley Básica de la RAEHK que se aprobaría en 1990. Era más de lo que podía soportar y se dispuso a tomar precauciones. El movimiento democrático de Hong Kong cosecharía buena parte del éxito de aquellas protestas en las elecciones celebradas en 1991 en las que si bien la participación fue relativamente escasa (tan solo se inscribieron la mitad de los electores potenciales y de ellos votaron el 40%), conseguían obtener 81 de los 110 puestos en disputa en las elecciones a los consejos de distrito y 11 de los 18 elegibles en el Consejo Legislativo. Conviene tener presente que desde su fundación en 1843 hasta 1991 el Consejo Legislativo de Hong Kong no había conocido ni un solo miembro elegido directamente por sufragio universal.

Desde Londres, el distanciamiento se consolidaba a partir del nombramiento de **Cristopher Patten** como gobernador de la colonia en 1992. Desde el primer momento, Patten, ex presidente del Partido Conservador británico, pretendió erigirse en representante, no de la Corona británica ante los hongkoneses, sino de la población local ante Beijing.

1.2. Los problemas de la devolución

1.2.1. La democratización de la vida política

Hong Kong nunca vivió en democracia. Las autoridades británicas solo en una ocasión expresaron cierta preocupación por regularizar esta anomalía. Fue en 1946, cuando los laboristas en el poder en Londres impulsaron una reforma que contemplaba la elección del Consejo Legislativo de la colonia mediante cauces democráticos normales. Pero el gobernador, sir **Mark Young**, acabó por rendirse a la terca oposición de los medios económicos, tanto chinos como extranjeros, y todo quedó en nada. La administración británica garantizó ciertamente algunas libertades (de expresión especialmente), pero no puede calificarse de democrática su vida política. En vísperas de la retrocesión se daba la paradoja de que mientras Gran Bretaña, la potencia imperialista, quería democratizar, China, la víctima del colonialismo mostraba su predilección por el modelo colonial, paternalista y autoritario.

Los disturbios internos producidos en los años setenta del siglo pasado lograron provocar alguna ligera modificación. Gran Bretaña se percató de que debía habilitar mecanismos para tomar mejor el pulso a la vida ciudadana y en 1973 consintió que la

mitad de los miembros del consejo urbano fueran elegidos con participación de los sectores profesionales y sociales y no designados. El modelo de funcionamiento de las autoridades británicas hasta poco después de la firma de la Declaración Conjunta se basó en la cooptación de las elites y no en la elección natural y democrática. El concepto de sufragio universal se introduce por primera vez en 1982 para los mayores de 21 años y con 7 de residencia mínima en el enclave. A finales de 1983, tan solo 904.916 personas, el 32% del electorado potencial, figuraba inscrito en el censo electoral. Las razones del desentendimiento social pueden ser múltiples y variadas: desde remotas (idiosincrasia china que daba la espalda a un proceso con el que no se identificaba en lo más mínimo) hasta las más recientes (la maniquea asociación entre política y disturbios provocada por el efecto de la Revolución, según algunos). Conviene tener presente que muchos de los habitantes de Hong Kong eran huidos de China y acumulaban una gran aversión a la política; por otra parte, en su orden de prioridades, el desarrollo de la economía y del comercio ocupaban el epicentro de sus preocupaciones.

No obstante, uno de los principios de la Ley Básica hace referencia a un Hong Kong gobernado por los hongkoneses, lo que fue interpretado como una aspiración a una mayor participación de la comunidad local en los asuntos públicos.

Uno de los mayores cambios previstos y contemplados en la ley es la elección separada de gobierno y legislativo, dando lugar a una nueva cultura política en Hong Kong, previamente inexistente. En cuanto al sufragio universal, el art 45, párrafo 2 del Capítulo IV señala que el objetivo final es la elección del Jefe Ejecutivo por sufragio universal entre candidatos propuestos por un comité ampliamente representativo de conformidad con los procedimientos democráticos. Lo mismo se dice en el art 68 a propósito de la elección del Consejo Legislativo. Es pues un mandato, pero sin hacer mención de una fecha concreta de materialización. El gobierno de la RAEHK estableció un calendario para el sufragio universal en las elecciones del Jefe Ejecutivo en 2017 y del Consejo Legislativo en 2020.

Para comprender el verdadero sentido de las discrepancias sino-británicas en torno al problema de la democratización de la vida política, conviene tener en cuenta que no existían diferencias sustanciales en cuanto a la configuración institucional pero si en cuanto a la forma de elección/designación de los miembros llamados a desempeñar las funciones representativas. Debemos pues diferenciar:

- La estructura de partida.

En la cúpula del poder había un Gobernador que era designado por la Reina de la Corona británica y actuaba en su nombre. El Gobernador tenía una doble función: actuaba como Jefe del Estado y como Jefe del Gobierno. Para la realización de su cometido estaba asistido por un Consejo Ejecutivo compuesto por cinco miembros que formaban parte del organismo por derecho propio (ex officio) y otros 10 miembros designados por la propia Reina según su criterio y revocables en todo momento. Sus funciones eran meramente consultivas. Existía también un Consejo Legislativo

integrado por 50 miembros designados entre altos funcionarios y personalidades de la vida cultural, social y, sobre todo, económica de Hong Kong. Sus poderes eran más formales que reales y en ningún caso equiparables a los de una asamblea legislativa. El Consejo Urbano contaba con 24 miembros de los que la mitad eran elegidos. A él competía la responsabilidad de las cuestiones relacionadas con la gestión urbana. También existían numerosos comités consultivos constituidos sobre una base geográfica, territorial, social o incluso administrativos. Todos sus miembros eran designados en base a criterios de “estricta competencia”. Por último, el poder judicial era el único que, formalmente, escapaba al control del Gobernador, gozando de aquella independencia común y propia en los Estados de derecho.

- El acuerdo de 1991

El “núcleo duro” del problema de la democratización se centró en la configuración del Consejo Legislativo. En abril de 1985, al poco tiempo de firmarse la Declaración Conjunta, la APN aprobó una resolución para establecer una comisión redactora de la Ley Básica de la RAEHK. Esta comisión estaría formada por 59 personas, de las que 36 procedían del continente y otras 23 de Hong Kong. La comisión funcionó con el apoyo de un Comité Asesor compuesto por personalidades de diferentes círculos sociales de Hong Kong. La redacción finalizó en febrero de 1990 y el 4 de abril fue aprobada por la APN. La Ley Básica de la RAEHK incluye tres anexos: sobre las formas para seleccionar los funcionarios administrativos de la RAEHK, sobre los procedimientos para establecer el Consejo Legislativo de la RAEHK, y un apéndice sobre las leyes de carácter estatal de aplicación en la RAEHK. Igualmente, se aprobaron los proyectos de bandera y de escudo. La parte británica hizo llegar por vía diplomática sus opiniones a propósito del contenido de estos documentos.

El motivo principal de discrepancia radicó en la determinación de los miembros del Consejo Legislativo que se elegiría en 1995 porque su mandato estaría en vigor en 1997, en el momento de producirse la retrocesión y por espacio de dos años más. En la “Resolución acerca de las formas para el establecimiento del gobierno y del Consejo Legislativo del primer período de la RAEHK”, aprobada en abril de 1990 por la APN, se establece que en ese primer periodo el citado Consejo estará formado por 60 miembros, de los que 20 serán elegidos de forma directa y 10 procederán de diferentes organizaciones sociales, los otros 30 serían designados. Y se señalaba además: “Si la composición del último Consejo Legislativo coincide con los postulados de esta resolución, sus integrantes podrán continuar en sus puestos hasta la celebración de nuevas elecciones”. En 1988, China proponía que en las elecciones de 1991 se eligieran directamente un máximo de 10 miembros del Consejo Legislativo.

La contrapropuesta de las autoridades británicas fue la siguiente: en 1991 debían elegirse 20 plazas directamente, 30 en 1995, 40 en 1999 y la totalidad en el año 2003. La contra-oferta china matizó: en 1995, 20 directamente, 24 en 1999, 30 en 2003. Ambas partes llegaron finalmente al acuerdo de que serían elegidos 18 puestos directamente en la convocatoria electoral de 1991. En dichas elecciones, de esos 18, el

Partido Democrático de **Martin Lee** obtuvo 15 escaños, mientras que la pro-china Alianza Democrática para la Mejora de Hong Kong, de **Tsang Yuk-shing** obtenía 1 representante. Los otros dos restantes, independientes, estaban más cerca de Lee que de Tsang. En los consejos urbanos, los demócratas obtendrían 81 de los 110 puestos a elegir.

- La propuesta de Patten

Cristopher Patten fue nombrado gobernador de Hong Kong el 28 de julio de 1992. Apenas un mes después de su llegada propone al Consejo Legislativo de la colonia una reforma política (que sería aprobada por 32 votos contra 21) que no es consultada previamente con Beijing y que básicamente implica imprimir un ritmo más rápido al proceso de elección directa de los principales órganos político-administrativos de la colonia. La propuesta echó por tierra el acuerdo alcanzado con China el año anterior.

La iniciativa de Patten incluía la plasmación de un nuevo calendario electoral. Plantea, en primer lugar, la eliminación de todos los puestos de miembros designados para los dos consejos municipales. Por lo que respecta a las agrupaciones gremiales o sectoriales, que habían sido introducidas por el gobierno británico en 1985 para mejorar la representatividad de los círculos financieros, económicos y de determinadas organizaciones sociales, propone la celebración de elecciones directas por colectivos sobre la base de una votación individual. De este modo, los aproximadamente 100.000 electores de estos grupos se transformarían en casi tres millones de personas. En marzo de 1995 se celebrarían las elecciones al Consejo Municipal y en septiembre de 1995 al Consejo Legislativo. China intentó entonces negociar sobre la base de diferenciar las elecciones al Consejo Legislativo de una parte y las municipales de otra, pero fracasa y las negociaciones se rompen.

El carácter de las innovaciones de Patten, planteadas ciertamente a toda prisa y en vísperas del cambio de soberanía y el hecho mismo de que las reformas se pretendan introducir sin consulta previa con Beijing, tratando de imponer una política de hechos consumados, sugieren la interpretación china de que Gran Bretaña pretendía esencialmente dificultar su política hacia Hong Kong. A partir de ese momento, las negociaciones en otros dominios (financiación de la construcción de un nuevo aeropuerto o para la ampliación del puerto) se resienten notablemente.

Pero Patten sigue adelante con su plan. En las elecciones de 1995 la participación fue del 35,78% de los electores inscritos (inferior a la de 1991) y en ellas triunfaron abrumadoramente los partidarios del movimiento democrático de Martin Lee. Obtuvieron 19 de los 20 escaños en disputa, además de otros seis elegidos por el sistema indirecto; en total, 25, cuatro más de los que tenían en 1991. Los candidatos favorables a Beijing obtuvieron 6 asientos y de ellos solo 1 por sufragio directo. No obstante, la escasa participación fue interpretada en Beijing como una muestra del desinterés de la mayoría de la sociedad hongkonesa por las diatribas políticas y no tarda en anunciar que disolverá las instituciones conformadas al amparo de las normas propuestas por Patten y que modificará todas las normas legales que se aprueben desde

estas instancias. Ello fue posible al no apreciar en Hong Kong la existencia de una oposición lo suficientemente poderosa como para obligarle a reconsiderar sus posiciones.

- La reacción china

A comienzos de 1993 las autoridades de Beijing asumieron que las discrepancias en materia de democratización de la vida política eran irresolubles y que debía preparar su propia estrategia para disponer de una arquitectura política adecuada para cuando se produzca la salida de los británicos. China temía encontrarse en Hong Kong con unos órganos dominados por sectores anticomunistas que insistieran en la democratización dificultando sus planes de control político. El 1 de julio de 1997 no se produciría el esperado “through train” (extensión del mandato) de las instituciones precedentes, sino la pura y simple sustitución de las mismas.

En el ámbito institucional, Beijing decidió crear un Comité Preliminar del Comité Preparatorio de la RAEHK que organizó en cinco comisiones (asuntos políticos, economía, justicia, cultura, asuntos sociales y seguridad). En 1996 se creó el Comité Preparatorio integrado por 150 miembros de los que 94, el 63%, eran originarios de Hong Kong, y en agosto de ese mismo año creó un Comité de Selección integrado por 400 miembros. Este Comité, del que pasarían a formar parte los 26 diputados de Hong Kong en la APN y los 34 miembros hongkoneses de la CCPPCh (Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino), además de numerosos representantes de la colonia, es el que elige a los 60 miembros del Consejo Legislativo Provisional de un total de 130 candidatos y también a quien sería el primer ministro. Este Consejo, que incluyó a 33 diputados que formaban parte del Consejo de Patten, inició sus funciones antes del 1 de julio de 1997, elaborando un cuerpo legal transitorio que sustituiría al entonces vigente en todo aquello que consideraba necesario modificar.

China tenía preparada pues su infraestructura para asegurar el control de Hong Kong desde el primer momento. En paralelo, no pocos reprochaban a Londres que en los 150 años de colonialismo nombrara hasta 28 gobernadores sin consultar nunca y para nada a los residentes locales y denunciaban que los esfuerzos democratizadores de Patten eran una estrategia orientada a presionar políticamente a Beijing para obtener una posición de ventaja en ciertos aspectos de las relaciones económicas bilaterales.

La verdad es que aunque Gran Bretaña quería aparentar vida democrática en Hong Kong, tan solo había permitido la libertad de expresión en el mejor de los casos, como hizo con el resto de sus dominios de ultramar. Cabe recordar que el partido comunista en Hong Kong fue prohibido por los británicos en 1968. Las acciones de Patten y su carta de garantía de los derechos civiles nos ofrecían el mito benevolente frente al interés chino por sacrificar las libertades civiles que recién se habían inventado en Hong Kong. Pero este siempre había sido tratado como colonia por los británicos y las reformas de Patten no parecían más que un espejismo.

1.2.2. Las relaciones Hong Kong-Taiwán

La importancia de Hong Kong en relación a Taiwán no solo se determina en función de la viabilidad y expectativas futuras de la reunificación del continente con la isla, que siguió muy de cerca todo el proceso de negociación. También derivaba de la importancia que Hong Kong tenía para el comercio y las inversiones taiwanesas en China continental que en ausencia de lazos directos se realizaban a través de Hong Kong. Los intercambios directos estaban prohibidos debido a que teóricamente las “dos” Chinas” seguían formalmente en guerra. La realidad, no obstante, apuntaba la fluidez de un negocio boyante que se alimentaba de las transformaciones que el continente vivía desde el inicio de la reforma en 1978. ¿Qué pasaría una vez China recobrase la soberanía sobre Hong Kong?

Naturalmente, a ninguna de las partes le interesaba que dicho proceso se estropeará. La dinámica comercial había aumentado de forma exponencial desde el inicio de la década de los años ochenta. Los más importantes bancos de Taiwán se habían establecido en Hong Kong. Su actuación estaba coordinada a través de una institución, la Chung Hwa Travel Service, que después de la retrocesión corría el peligro de desaparecer o ver mermadas algunas de sus funciones (la expedición de visados, por ejemplo). En julio de 2011 esta entidad fue red denominada como Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Hong Kong, mientras que la ex colonia británica abrió su Oficina Económica, Comercial y Cultural en Taipéi en diciembre del mismo año.

La política de China en este sentido consistió en lo siguiente: no se perjudicarían las relaciones económicas, pero todo aquello que de algún modo evidenciara la existencia de esas “dos” Chinas no podría subsistir. Así fue: a partir del 1 de julio de 1997, por ejemplo, los barcos taiwaneses debieron arriar su bandera para atracar en el puerto de Hong Kong. La actitud de Beijing diferenciará claramente las instituciones económicas, culturales y políticas, y también rangos y niveles.

Qian Qichen, entonces ministro de Asuntos Exteriores de China, señaló el 22 de junio de 1995 las líneas fundamentales que presidirían estas relaciones después de la retrocesión: 1) Los intercambios y contactos no oficiales en el ámbito personal, de la economía o la cultura seguirían básicamente inalterables, sin modificaciones; 2) Los residentes y el capital de Taiwán serían bienvenidos y gozarían de adecuada protección legal; 3) El tráfico marítimo y aéreo entre Taiwán y Hong Kong tendría la consideración de “vínculos regionales especiales”; 4) Los residentes de Taiwán podrán entrar y salir de Hong Kong de conformidad con las leyes de la RAEHK; 5) Los grupos científicos, religiosos, culturales, educativos o técnicos de carácter no gubernamental de Hong Kong podrían mantener y desarrollar sus relaciones con sus contrapartes de Taiwán sobre la base de la igualdad, la no interferencia y el respeto mutuo; 6) Los contactos, las conversaciones, la firma de acuerdos y el establecimiento de agencias de carácter oficial entre Taiwán y Hong Kong debían comunicarse al gobierno central para su autorización y aprobación, contando con el beneplácito de la RAEHK; 7) Las organizaciones y el personal de Taiwán que se encontraba entonces en Hong Kong

podría permanecer después de 1997 siempre y cuando no se dedicaran a la realización de actividades que entren en contradicción con las previsiones establecidas en la Ley Básica de la RAEHK o dañen su prosperidad.

1.2.3. La cuestión de la ciudadanía de los hongkoneses.

¿Qué relación mantendrían los más de seis millones de hongkoneses con Gran Bretaña a partir del 1 de julio de 1997? ¿Se respetaría el derecho de asilo de estas personas si una hipotética represión política los obligara a abandonar el país? Inmediatamente después de la firma de la Declaración Conjunta se inició una emigración de los temerosos y desconfiados de la política continental: 11.000 en 1985; 27.000 en 1987; 45.800 en 1988. Después de 1989, las cifras experimentaron una apreciable alza: 66.000 en 1992; 54.000 en 1993; 62.000 en 1994... Y mientras unos se iban, otros en el continente se preparaban para tomar posiciones: militares, funcionarios, policías...

La ley de nacionalidad británica de 1981 diferenciaba tres categorías: ciudadanos de pleno derecho, ciudadanos de los territorios dependientes, y nacionales británicos de ultramar. Tan solo los primeros disponían automáticamente del derecho de residencia y trabajo en Gran Bretaña. En 1984 había en Hong Kong 3.250.000 ciudadanos de la segunda categoría sobre una población de 5,5 millones de habitantes. Como consecuencia de las presiones derivadas de los sucesos de Tiananmen, el gobierno británico se vio en la obligación de aprobar una ley que concedía la plena ciudadanía (1ª categoría) a 50.000 familias (unas 250.000 personas) hongkonesas, con especial prioridad para todos aquellos que desempeñaban labores consideradas esenciales. Los ciudadanos de etnia no china que residían en la colonia quedarían equiparados a ciudadanos de la tercera categoría, es decir, al mismo nivel que los habitantes de cualquier país de la Commonwealth.

Desde la perspectiva china, tanto los chinos de Hong Kong como de Macao eran nacionalmente chinos, compatriotas (tongbao) por cuanto nunca habían reconocido la validez de los Tratados desiguales. Pero, en realidad, estos chinos disponían de un estatuto personal que los vinculaba al Reino Unido. Según la interpretación de Beijing, mientras estén en territorio chino no dispondrían de la protección consular británica. Únicamente podrían acceder a ella, si lo desearan, cuando se encontraran en territorio de un tercer país. China no acepta la doble nacionalidad y según su normativa, únicamente dejan de ser chinos aquellos ciudadanos que expresamente renuncian a su nacionalidad. A partir del 1 de julio de 1997 todas las personas de origen chino que vivan en Hong Kong serían ciudadanos chinos. China, por otra parte, se reservaba la interpretación de las dudas referentes a las cuestiones de la nacionalidad y residencia.

En los años previos a la retrocesión, tan solo un 10% de la población, fundamentalmente las elites empresariales y funcionariales, disponían de pasaporte extranjero, fundamentalmente británico.

1.2.4. Los refugiados.

En su momento, Hong Kong fue el punto de referencia y destino para miles de chinos que huían de la Revolución. Aquellos refugiados hicieron contribuciones decisivas al aumento de la población y la prosperidad del territorio. El censo pasó de 1.640.000 habitantes (1941) a 3.129.648 (1961); 4.402.990 (1976); 5.754.800 (1981). El 97% eran chinos y el 60% habían nacido en el enclave.

A finales de los años setenta, los protagonistas de la emigración, legal e ilegal, pasaron a ser otras comunidades, especialmente los vietnamitas. Instalados en campos de tránsito, pasaron de poco más de 9.000 en 1985 a más de 30.000 en 1993. Ello se vio favorecido por el hecho de que si bien la inmigración ilegal china era reprimida duramente, la vietnamita era consentida en función de los intereses internacionales de Gran Bretaña. Esto creó un importante resentimiento público contra la política británica que discriminaba a los chinos a favor de los vietnamitas. Una afrenta a la población local que se completaba con la obligación de cargar a los contribuyentes de Hong Kong los gastos de mantenimiento de la guarnición británica responsable de controlar la inmigración ilegal.

China exigió de las autoridades británicas su expulsión incondicional, pero los vietnamitas ofrecieron una tenaz resistencia a la repatriación.

1.2.5. Los problemas sociales.

El panorama de la problemática social en Hong Kong ofrecía una vertiente especialmente sombría respecto a la imagen financiera boyante de la colonia británica. Especialmente importante era el problema de la vivienda. Hong Kong tenía el valor del metro cuadrado más caro del mundo. Casi un millón de personas vivían en pequeños barcos que formaban un auténtico barrio flotante. Para intentar resolver este problema se intentaba ganar terreno al mar en varias áreas y para evitar su agravamiento, tras la retrocesión estaba previsto el reforzamiento de los controles fronterizos a fin de evitar afluencias masivas de los chinos continentales.

El movimiento sindical pro-chino confiaba en que la retrocesión derivara en una mejora paulatina del bienestar social y en el reconocimiento de mayores derechos en la esfera laboral. En Hong Kong no había salario mínimo ni sistema público universal de pensiones, los servicios públicos eran muy débiles... El movimiento sindical tampoco gozaba de una especial implantación. Según la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) solo el 5% de los trabajadores disponía de convenio. Los sindicatos de Hong Kong tenían prohibido afiliarse a organizaciones internacionales.

Un problema especialmente delicado era la represión de las sociedades secretas y la criminalidad. Según **Gerald L. Posner**, desde Hong Kong se controlaban los imperios de la heroína y del crimen más poderosos del mundo. La heroína era la espina dorsal de las sociedades secretas existentes en la colonia. Sus “triadas” eran el equivalente

asiático de la mafia siciliana, con un “ejército” propio y un sistema bancario clandestino altamente perfeccionado y en el que se manejaban miles de millones de dólares. Eran estas triadas hongkonesas quienes controlan el llamado “triángulo de oro” (Tailandia, Laos, Myanmar) por donde circulaba -¿y circula?- buena parte del opio y la heroína del planeta.

En 1993, el ministro de Seguridad Pública de China, **Tao Siju**, declaraba que no debería juzgarse a todos los miembros de las triadas con el mismo patrón. Un proverbio chino dice que “los ejércitos protegen al Emperador, pero las sociedades secretas protegen al pueblo”. En efecto, los miembros de estas organizaciones no siempre son ni han sido gánsteres. Las triadas surgieron en la primera mitad del siglo XIX, en el sur del país, como un movimiento de naturaleza patriótica, una especie de cofradías religiosas en las cuales sus miembros se vinculaban por juramento y pasaban a considerarse como parientes próximos. Desempeñaron un papel importante en la rebelión de los Taiping. Y la derrota de este movimiento supuso también una severa represión de estas sociedades provocando una huida masiva de sus miembros hacia Hong Kong.

Para hacer frente a la represión, muchas de estas sociedades se reconvirtieron desembarcando en actividades ilegales como la piratería, el contrabando de toda especie o la extorsión. A inicios del siglo XX solo una conservaba su espíritu inicial: los bóxers. Las sociedades secretas compaginaban los cometidos propios de la criminalidad tradicional con la prestación de eficaces servicios al poder reaccionario de la época. Su papel destacado en la represión del movimiento obrero en Shanghái y en otras ciudades del país era recompensado con una creciente influencia en los asuntos gubernamentales. Sus vínculos con el Kuomintang llegaron a ser muy estrechos e instaladas en Formosa siguieron funcionando después del triunfo de la Revolución en 1949. Cuando los británicos promovieron cierto combate a este fenómeno, muchas eligieron Taiwán como destino. Hoy se presume tienen filiales en toda Europa y Estados Unidos.

La preocupación de Beijing por controlar este fenómeno era comprensible. En primer lugar temía la extensión al continente de sus restaurantes, karaokes y otros negocios. Según algunas fuentes, el contrabando de armas adquiridas al EPL o de automóviles de lujo podría adquirir proporciones difícilmente disimulables. Internamente, China multiplicó la represión de su propia delincuencia, especialmente en la vecina Guangdong donde delitos como los robos de todo tipo de vehículos o los asaltos a los hombres de negocios eran bastante frecuentes al igual que los actos de piratería en aguas próximas.

6. Otros problemas

Cabe hacer mención de tres asuntos. En primer lugar, la construcción del nuevo aeropuerto, con una terminal de pasajeros que pasaría a ser el mayor edificio de Hong Kong. La ejecución de la construcción trascendía a 1997 y las autoridades chinas, dado su elevado coste, exigían a las británicas negociación previa de las obras para evitar hipotecas mayores ante una infraestructura que se presentaba como de las más grandes del mundo con su red anexa de autopistas y puentes, incluida la ampliación de los

islotes de Cep Lap Kok y Lam Chau, ganando 938 hectáreas al mar. En 1994 las autoridades chinas comunicaron a las británicas que no asumirían ninguna deuda originada por la construcción del aeropuerto. En noviembre del mismo año se cerró el acuerdo.

En segundo lugar, la independencia judicial. Las administraciones de justicia de China y Hong Kong eran muy diferentes. Mientras una estaba más vinculada al sistema político-partidario, en otra se basaba en la independencia propia de los estados de derecho. El problema se planteaba a tres niveles: estructura, personal y competencias. Durante la colonia, existía un Comité Judicial del Consejo Privado de Gran Bretaña que ejercía las funciones de última instancia. China creó una Corte de Apelación de forma que el proceso pudiera comenzar y finalizar en Hong Kong. El Tribunal Popular Supremo continental no goza, pues, de ninguna jurisdicción en la RAEHK, aunque sus resoluciones deben tener en cuenta el derecho constitucional de la RPCh.

En las negociaciones, China planteó la norma de que en ningún tribunal habría más de un juez no chino. Además, todos los magistrados deberían ser confirmados en sus puestos tras la retrocesión. Por último, no serían de su competencia los delitos relacionados con la seguridad o las relaciones exteriores, ámbitos excluidos de la futura autonomía hongkonesa. En junio de 1994 se firmó un acuerdo en esta materia entre las autoridades británicas y chinas.

Cabe señalar también que en la RAEHK no son de aplicación la mayoría de las disposiciones vigentes en China, tan solo doce leyes previstas en el anexo III de la Ley Básica.

Las bases y efectivos militares. Salvado el principal escollo (la construcción y futuro de la base militar de la isla Stonecutters), a mediados de 1994 se llegó a un acuerdo a propósito de las instalaciones militares. El destacamento del EPL en Hong Kong contaría con 13.000 efectivos. En la vecina Shenzhen se instalaría el destacamento más importante de la Policía Armada Popular, el séptimo regimiento de guarda-fronteras, formado por 3.000 hombres. A partir de entonces, los efectivos militares británicos presentes en Hong Kong se fueron reduciendo de los 8.200 iniciales a unos 3.000 que fueron totalmente evacuados el 30 de junio de 1997.

Por último, el Vaticano expresó su preocupación por el respeto de la libertad religiosa de los residentes en Hong Kong. Cabe señalar que Beijing y la Santa Sede no tenían –ni tienen– relaciones diplomáticas al reconocer esta al gobierno de la República de China. La designación del Obispo de Hong Kong, como también de los obispos en China continental, es siempre motivo de fricción ya que China no acepta las prerrogativas de la Santa Sede aunque en algún caso ha mediado acuerdo para evitar controversia en los nombramientos.

La impresión general en vísperas de la retrocesión era que China haría cuanto estuviera en su mano para evitar que el nuevo status de Hong Kong derivara en dificultades económicas o de otro tipo. En paralelo, habría cierta autonomía para la gestión de los

asuntos internos, aunque no se avanzaría en el diseño de un sistema político de corte occidental. Las elites económicas del enclave parecían conformes con la idea de capitalismo sí, ultraliberal por añadidura, pero democracia no. Dicha fórmula parecía proveer de cierta viabilidad inicial a sus pretensiones e inspiraba calma y seguridad a las multinacionales y los inversores. Las dudas provenían de los efectos de la obsesión por el control político que, de ser excesivos, podrían llegar a asfixiar. Por otra parte, estaba por demostrar la capacidad de afirmación autonómica en un país con escasa tradición descentralizadora en la administración y como esa realidad se plasmaba en el respeto de las libertades públicas, sin duda, mayores a las vigentes en el continente.

En suma, habría dos sistemas, dos monedas, y también dos niveles de libertad diferentes.

1.3.El broche final de la retrocesión: Tung Chee-hwa

En vísperas de la retrocesión muchos se preguntaban qué pasaría después del 1 de julio de 1997 en Hong Kong, si subsistiría o no su modo de vida, que cambios implicaría, si se mantendría Hong Kong como un centro financiero internacional o si la espesa sombra de la inestabilidad pondría fin a su aureola de pequeño paraíso capitalista. De entrada, la devolución supondría que un pequeño territorio con una economía capitalista altamente desarrollada sería engullido por otro inmensamente superior en tamaño con una economía formalmente socialista y escasamente desarrollada. En la práctica, sin embargo, había que tener presente que si bien las diferencias en términos de desarrollo eran palpables, la confrontación era más relativa en términos estructurales. En China llevaban años funcionando las “zonas económicas especiales”: la especialidad consistía en que en ellas funcionaba el capitalismo puro y duro en lo económico con una cobertura de control político del PCCh. Por lo tanto, en cierto modo, estaban relativamente acostumbrados a convivir con situaciones más o menos semejantes.

Por otra parte, la reversión de Hong Kong estaba íntimamente relacionada con la reforma y apertura de China al exterior. No fue casual que el anuncio de esta nueva política en 1978 coincidiera, de una parte, con la creación de una Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, adjunta al propio Consejo de Estado; y de otra, con la instalación de las primeras zonas económicas especiales en las proximidades de Hong Kong o Macao.

Con carácter previo, el 17 de diciembre de 1996, **Tung Chee-hwa** era nombrado por el gobierno central como primer Jefe Ejecutivo de la RAEHK y asumiría tales funciones el 1 de julio del año siguiente. Su designación explicitaba la voluntad de Beijing de no ceder un ápice ante Londres pero, sobre todo, el pleno entendimiento del PCCh con la flor y nata de la elite capitalista de Hong Kong. Tung era un armador multimillonario nacido en Shanghái de donde huyó con su familia tras la victoria comunista de 1949. Presidente del Comité Económico Hong Kong-EEUU, miembro de la Hoover Institution, amigo personal de **Henry Kissinger** y de **Jiang Zemin**, obtuvo 320 votos de un total de 400 en la votación realizada en el Comité de Selección creado por Beijing, enfrentándose a otros dos rivales: el ex fiscal **Ti Liang Yang** y el empresario **Peter**

Woo. Tung además había sido miembro del Consejo Ejecutivo del enclave desde la llegada de Christopher Patten en 1992 hasta julio de 1996. Simbolizaba cierta continuidad en la armazón institucional y el deseo de que la transición se llevara a cabo sin contrariedades.